

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, por sentencia de diez de marzo del año en curso, condenó a **Juan Javier Caro Suárez** a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, y la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por su autoría en un delito consumado de porte ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 9° inciso primero, en relación con el artículo 2° letra b), ambos del Decreto N° 400, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cometido en la comuna de Puente Alto el día 9 de septiembre de 2019. Se dispone el cumplimiento efectivo de la pena, reconociéndole los abonos que indica.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad en contra del referido fallo, el que fue admitido a tramitación y conocido en la audiencia del día once de mayo pasado, según da cuenta el acta de la audiencia de impugnación.

Considerando:

Primero: Que por el recurso deducido se invoca únicamente la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución Política de la República o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, defecto que se configuraría en el caso en estudio, por la transgresión del derecho a un debido proceso consagrado en el inciso 6° del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República; las normas que cautelan el derecho a



la libertad ambulatoria, el deber de registro, a la intimidad y, por consiguiente, el derecho a un procedimiento racional y justo.

Indica que este caso en concreto, el control de identidad y posterior registro fue realizado con infracción de garantías fundamentales, y fuera de los límites señalados por el artículo 85 del Código Procesal Penal, toda vez que el imputado no se encontraba en ninguna de las hipótesis que regula la norma, a saber, que existieren indicios de que el sujeto hubiere cometido un crimen, simple delito o falta.

Explica que los funcionarios solamente contaban con la verificación de un vehículo en un lugar determinado, en cuyo interior iban unos sujetos cuya ubicación, características físicas y de vestimentas le fueron proporcionadas por una hombre anónimo, quien además refirió que su representado manipulaba un arma de fuego, desde una perspectiva ex ante, lo que carece de la relevancia asignada, toda vez que en él no se advierten elementos precisos referidos a la comisión de ilícito alguno.

En efecto, de acuerdo con lo fijado en la sentencia, lo que motiva la presencia policial en el lugar de la detención es la ya citada denuncia dando cuenta de la presencia de un sujeto que estaría manipulando un arma en una ubicación determinada, lo que no fue constatado por los policías al constituirse en el lugar, de manera que lo efectivamente observado por ellos -un sujeto en la vía pública- configura por esencia una conducta absolutamente neutra, no solo tolerada, sino que tutelada por el ordenamiento jurídico, desde que la libertad ambulatoria es un derecho de todo habitante de la República, susceptible de ser ejercido y protegido, por lo que esta circunstancia dista de satisfacer los presupuestos que exige el artículo 85 del Código Procesal Penal para realizar el control de identidad.



Así las cosas, los funcionarios se excedieron en las facultades que el ordenamiento jurídico expresamente les consagra, obrando en contravención a lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal, al llevar a cabo un procedimiento ilegal y arbitrario que posteriormente devino en la detención del encausado, en circunstancias que no se encontraban habilitados para ello, afectando de esa forma su libertad personal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, pero además el debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3, inciso 5°, de la Constitución Política de la República, al no verse respetadas una serie de garantías procesales que informan el actuar policial y el levantamiento de prueba, así como las informaciones y comunicaciones que deben existir entre las policías y el Ministerio Público, garantías que han sido establecidas precisamente como un límite al actuar arbitrario de los agentes del Estado.

Finaliza solicitando acoger el recurso, invalidar el juicio oral y la sentencia recurrida en la parte que condenó a su representado, y se determine el estado en que deba quedar el procedimiento y ordene la remisión de los antecedentes al tribunal no inhabilitado que corresponda para efectos que se disponga la realización de una nueva audiencia de juicio oral, excluyendo toda la prueba del Ministerio Público por haber sido obtenida con infracción de Garantías Fundamentales.

Segundo: Que como se desprende del recurso, las afectaciones en que la defensa fundamentó la causal se originarían con motivo de la recolección de evidencia que se tacha de ilícita, inmersa, según su parecer, en un procedimiento de control de identidad al margen de la normativa que lo regula, y su posterior incorporación y valoración en el juicio oral. En particular se cuestiona la realización de diligencias investigativas policiales de cuya



intervención arranca, de modo trascendental, la imputación delictiva contra el condenado.

Tercero: Que como ya ha sostenido esta Corte en diversos pronunciamientos -SCS Roles N° 11767-13, de 30 de diciembre de 2013; N° 29534-14, de 20 de enero de 2015; N° 5711-15 de 09 de junio de 2015 N° 22199-16, de 1 de junio de 2016, entre otros-, si bien es efectivo que la Constitución Política de la República entrega al Ministerio Público la función de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, regla que repite su Ley Orgánica Constitucional y múltiples instrucciones de parte de la autoridad superior de aquél, el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía en relación a la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación, conciliando su eficacia con el respeto a los derechos de las personas, para cuyo efecto el artículo 83 del Código Procesal Penal, la compele a practicar la detención sólo en casos de flagrancia, situación que puede generarse con ocasión de un control de identidad.

Cuarto: Que la sentencia consignó a propósito de los cuestionamientos formulados por la defensa, en su considerando décimo cuarto que *“en el presente caso, en primer lugar, y tal como lo expuso detalladamente el funcionario JAIME RAIMILLA PAIDANCA, un transeúnte de sexo masculino, señaló que en calle Gandarillas había un vehículo gris Peugeot con 4 individuos en su interior, y uno de ellos de chaqueta azul, exhibía un arma de fuego que pasaba de mano en mano. Como se puede apreciar, si bien el sujeto que otorgó los antecedentes no señaló su identidad, si entregó datos certeros y objetivos (marca y color del vehículo, características de vestuario utilizado por uno de sus ocupantes), que posteriormente permitieron ubicar el vehículo*



en cuyo interior el encartado portaba el arma de fuego. En segundo lugar, los antecedentes otorgados por el sujeto de sexo masculino, motivaron un seguimiento del vehículo, cuyos ocupantes al advertir la presencia policial, huyen del lugar, siendo seguidos por carabineros. En tercer lugar, cabe señalar que la detención del imputado, se produce ya que carabineros se encontró en una hipótesis no del artículo 85 del Código Procesal, sino que del artículo 83 letra b) del mismo texto, ya que el carabinero JAIME RAIMILLA PAIDANCA, expuso que estando a un metro del copiloto, quien según el transeúnte portaba el arma de fuego, divisó que el sujeto sacó desde la petrina (sic) de su pantalón un arma de fuego negra, es decir, se encontraba ante un caso de flagrancia, que permite el actuar autónomo de las policías”.

Quinto: Que es importante razonar sobre el contexto fáctico que usualmente rodea a una diligencia como la de la especie, porque los indicios de la probable comisión de un ilícito se encuentran usualmente en forma intempestiva, situación que obliga a los policías a evaluar de inmediato la presencia de elementos susceptibles de tal estimación y que hagan procedente la actuación.

Sexto: Que relacionando la acción cuestionada con las normas que le son aplicables, resulta simple inferir la legalidad del cometido de los funcionarios policiales. En efecto, según se estableció con el testimonio del funcionario policial Jaime Raimilla Paidanca, un transeúnte les informó que unos individuos estaban al interior de un vehículo cuyas características describe, detallando la vestimenta de uno de ellos, el que portaba el arma de fuego, así como el lugar donde se encontraban, la actividad que desplegaban, que dada la precisión de los antecedentes mencionados, revestía seriedad y verosimilitud, corroborados además por las circunstancias observadas por los



Carabineros al llegar al sitio, consistentes en la presencia del vehículo con los sujetos en su interior, cuyo conductor aceleró al ver la presencia policial, pudiendo apreciar el testigo que el acusado sacó de la pretina de su pantalón un arma de fuego.

Séptimo: Que como asienta el fallo, existió en el caso *sublite* un indicio de la comisión del delito en cuestión por parte del acusado, motivo por el que no se transgredió la norma del artículo 85 del Código Procesal Penal ni garantía constitucional alguna, ya que la diligencia policial de excepción consistente en el control de identidad ha de tenerse, en dichas circunstancias, como racional y justa, fundada en condiciones objetivas apreciadas por los funcionarios policiales que razonablemente permitían sostener la posibilidad de corresponderse con un hecho ilícito que les permitía proceder autónomamente.

Con todo, al momento de procederse al aludido control de identidad por la policía, se advirtió que el imputado efectivamente portaba un arma de fuego, lo que autorizaba igualmente su detención por tratarse de un caso de flagrancia, conforme lo disponen los artículos 129 y 130, ambos del Código Procesal Penal.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 374 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del condenado Juan Javier Caro Suárez, contra la sentencia de diez de marzo de dos mil veintiuno y el juicio oral que le precedió, en los antecedentes RUC 1900976801-k, RIT 14-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, los que, en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 21.851-2021



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma el Ministro Sr. Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.



En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

